

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/19884> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Balderas Domínguez, J.

Title: Discursos y narrativas sobre violencia, miedo e inseguridad en México : el caso Ciudad Juárez

Issue Date: 2012-09-27

Conclusiones

Cuando en 2008 comenzaron a presentarse distintos hechos violentos de alto impacto en los espacios públicos y privados de Ciudad Juárez, a la par de ello, comenzaron a formularse diversas interrogantes ciudadanas acerca de los posibles orígenes de dicha circunstancia, planteadas mayormente, desde la incertidumbre y el desconcierto. Como lo comentamos al inicio del libro, esto no ocurrió únicamente con el ciudadano promedio, también en el campo académico comenzaron a formularse diversas hipótesis que apuntaban hacia buscar la comprensión de la compleja problemática. En este último esfuerzo se situó la presente investigación, que hoy concluye en forma de libro. Actualmente, las interrogantes siguen siendo numerosas, pero también se ha logrado avanzar en la comprensión de algunas de ellas.

Para abordar el tema de la violencia la estrategia de este trabajo se orientó, en primera instancia, a realizar una revisión bibliográfica exhaustiva de la literatura de distintas disciplinas sociales. Primeramente, se revisaron los materiales de algunos autores clásicos que han reflexionado sobre dicha trama, para reconocer que muchos de sus argumentos siguen teniendo plena vigencia para estudiar la situación actual. Así, podemos reconocer después de este recorrido sobre la dinámica urbana local y el contexto nacional, que el contrato social (Rousseau, Hobbes) se ha debilitado; que el monopolio de la violencia legítima por parte de Estado está siendo disputado por nuevos actores armados (Weber); que estamos viendo de manera cada vez más recurrente ejemplos de retrocesos civilizatorios (Elias) así como muestras de anomia social (Durkheim). La otrora, sacralidad de la muerte se ha trivializado (Girard); además todo ello opera dentro de nuevas formas de acumulación originaria, propias del capitalismo contemporáneo (Marx). Así mismo, la revisión de la literatura que reflexiona sobre las violencias contemporáneas, permitió, reconocer que actualmente los niveles infra y metapolíticos de la violencia, predominan sobre el político. La violencia informe, gratuita, o la “violencia por la violencia” (Imbert, Wieviorka, Sofsky), se rige más por principios meramente económicos, que por los valores éticos o ideológicos de antaño. La globalización y sus efectos criminógenos parecen haber flexibilizado múltiples cuestiones, dentro de ellas, las políticas neoliberales han reducido al Estado de bienestar a su mínima expresión, de manera aun más drástica en el contexto latinoamericano, que en sus diferentes crisis, ha agudizado el problema de la seguridad ciudadana y alimentado la cultura del miedo, que a su vez, ha influido en

la proliferación de la privatización de la seguridad y la reclusión ciudadana en modelos residenciales cerrados o en el atrincheramiento en el hogar. En lo que respecta al Estado mexicano, esta ciudad es muestra latente del progresivo debilitamiento de su hegemonía en el monopolio de la fuerza, de consolidar un Estado de derecho, mismas características que lo aproximan a las definiciones del Estado débil o fallido. Al finalizar el año 2011, Ciudad Juárez dejó de ubicarse como la ciudad más violenta del mundo, para ocupar el segundo escaño, dejándole a San Pedro Sula, Honduras el primer sitio. En lo que va del 2012, igualmente a nivel local los índices de asesinatos y delitos de alto impacto han disminuido considerablemente, sin embargo, dichos sucesos se han expandido a otras regiones del país. Además estos acontecimientos se han convertido en componentes de los sucesos diarios de la nueva dinámica de la vida cotidiana fronteriza.

Por otra parte, en los últimos años se han hecho cada vez más presente las distintas formas de colusión y simbiosis del aparato del Estado con los grupos delincuenciales. El Estado mexicano en el cambio de régimen y en los gobiernos de la alternancia, han permitido la evolución y el fortalecimiento de este campo específico a lo largo de décadas. Posibilitando una mayor autonomía relativa de los traficantes, que al margen del control autoritario que antiguo régimen ejercía, comienzan a disputar nuevos espacios de poder. En este nuevo esquema, la querrela incluye diferentes regiones y ciudades, en donde los traficantes comienzan a ocupar algunas de las funciones que el Estado mexicano —experimentando un profundo proceso de adelgazamiento, después de décadas de políticas neoliberales— dejó de realizar. Esto ha permitido, a su vez, la ampliación y diversificación de las actividades propias del crimen transnacional organizado y de la delincuencia común, como la industria de la protección, el robo de autos, el secuestro y el tráfico de seres humanos, entre otras. Sin embargo, en lo referente a la respuesta estatal, cuando se trata de atacar la protesta social y el activismo político de las organizaciones de la sociedad civil, de los grupos de organizados de estudiantes y derecho humanistas, no parece mostrarse un esquema de debilidad. En estos casos la estrategia gubernamental parece más sólida y organizada. Este último aspecto, muestra una tendencia hacia la consolidación de un Estado de corte policiaco, que trata de afrontar la disidencia y el activismo político. Por otra parte, el Estado mexicano parece estar enfrascado en el discurso tradicional prohibicionista. Sigue sin tomar en cuenta las observaciones críticas que sugieren un replanteamiento de las estrategias contra el crimen organizado o en el fortalecimiento

de la seguridad ciudadana. Un giro hacia un enfoque de salud pública, particularmente hacia la política de reducción de daño, significaría un gran avance. Así mismo, la estrategia del gobierno, parece apuntar en una dirección opuesta, a la que han optado países que han padecido problemas similares como Italia y Colombia, mismos que apuntan a un fortalecimiento del aparato jurídico, a combatir la corrupción e impunidad desde dentro del Estado, a rastrear el lavado de dinero y a fortalecer el Estado de derecho.

La estrategia gubernamental se orienta a atender las causales directas y estructurales como las condiciones de inequidad, pobreza, desigualdad y exclusión social o transformar algunas alternativas como dotar de un mayor presupuesto e inversión al sistema educativo y, de este modo, crear nuevas opciones de fuentes laborales que permitan alternativas para la movilidad social de los grupos marginales. Tampoco ha enfatizado la inversión y el apoyo a proyectos culturales independientes y estatales, como en otros países, que permitan regenerar alternativas a la resolución no violenta de los conflictos, entre otros múltiples insumos, que provienen del campo de la cultura. Contrario a esto, parece alta la tolerancia a las condiciones de inequidad y desigualdad existentes en el país, no solamente del gobierno, sino de las clases altas, e igualmente de las élites económicas. En cuanto a la élite política, parece no preocuparle demasiado el riesgo que supone la toma del Estado por parte de los diferentes actores armados, misma que podría suponer una crisis institucional severa para el país. Ésta parece seguir centrada en seguir manejando los recursos públicos de manera discrecional, de forma que los puestos políticos sigan siendo alternativas rápidas de enriquecimiento por los altos salarios de que disponen y la nula rendición de cuentas, a los cuales se les pueden sumar las componendas de la corrupción endémica.

Así mismo, como vimos en el capítulo tres, México arrastra, sobre todo a partir de los últimos gobiernos de corte neoliberal, con una condicionante estructural y violencia sistémica que ha agravado las desigualdades históricas, y ha ensanchado los niveles de pobreza de manera ascendente. En ese rubro, el crecimiento económico se ubica a la saga de las economías latinoamericanas. Esto es en parte, debido a la dependencia tan extrema que tiene con la economía norteamericana, misma que le impide diversificar sus nexos comerciales. Y sobre todo, el vínculo al extremo que estableció este gobierno mexicano con las políticas antidrogas de los Estados Unidos. Ciudad Juárez ha resultado ser una víctima de ambos criterios, tanto de la “guerra

contra las drogas”, así como de lo que parece ser el “colapso del modelo maquilador”. Así, las distintas formas de exclusión social; el aumento de la precariedad, debido a las agudas crisis económicas; delinean un panorama propicio para que se dé el vínculo pobreza y delincuencia, así como un aumento de la anomia, alicientes a su vez, del desarrollo de esferas de paralegalidad y florecimiento de la industria de la protección. Dentro de este contexto, se explica el ascenso notorio de los índices de criminalidad a nivel nacional, regional y local, presentado en gráficas que demuestran, que el aumento de homicidios, secuestros, robos violentos, extorsiones, alimentan una creciente sensación de inseguridad y, a su vez, el descrédito de las instituciones estatales. Sobre todo de aquellas encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Por otra parte, como lo analizamos en el capítulo cuatro, este clima de violencia ha reconfigurado, el ya de por sí problemático escenario urbano, de modo que el espacio público se ha abandonado por considerarse extremadamente riesgoso. La noción de privacidad se ha radicalizado con los modelos residenciales “cerrados” y la proliferación y desarrollo de toda una industria de los dispositivos de seguridad para “proteger” los hogares. La inseguridad dejó de tener una dimensión espacial y temporal para convertirse en aleatoria, azarosa e impredecible. En ese contexto se explican las tendencias ciudadanas hacia la agorafobia y hacia la alterofobia, los espacios públicos y los “otros” se constituyen como las nuevas figuras del delito. La experiencias subjetivas sobre la violencia se expresan a través del lenguaje, por medio de narrativas, relatos, historias, pero también se quedan en el silencio, en el secreto, el rumor y el miedo. En muchas de las ocasiones se corporaliza y es evidente, en las miradas, los gestos, las rutinas, los nuevos rituales y en el obligado encierro. También, la contabilidad y experiencia cotidiana con la muerte, produce formas naturalización y acostumbramiento, en donde ésta se incorpora como un incidente más del acontecer cotidiano, que se puede encerrar en una frase como la siguiente: “llegué tarde porque me desviaron, debido al acordonamiento por un muerto”. En este último ejemplo, la insensibilidad, es, sin lugar a dudas, la muestra de uno de los más funestos efectos de la violencia, de la cual estaría pendiente valorar su impacto psicosocial. Otro aspecto analizado en este capítulo, es el hecho de que los jóvenes juarenses han puesto “una alta cuota de sangre” en esta guerra. Este sector ha sido estigmatizado, mientras la ausencia de una política pública sobre juventud es notoria, ya no se diga, que su punto de vista sea integrado. Esto ocurre en algunos gobiernos locales de países

latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil, en donde se intentan construir políticas menos verticales que integren la participación juvenil, concebida como un derecho y como una herramienta privilegiada para la construcción de la identidad y su autonomía. “Que sean los jóvenes quienes decidan sobre los programas según sus necesidades” (Vanderschueren, 2007: 210). Mientras que no se creen alternativas educativas y laborales que permitan la inserción de los jóvenes, que a su vez, se conviertan en posibilidades reales de movilidad y estabilidad social, la migración hacia la ilegalidad, seguirá siendo una constante en este sector. Es difícil lograr una transformación estructural, en las condiciones actuales de verticalidad de las políticas públicas hacia los jóvenes, en programas que parecen priorizar la deportización, o la escolarización sin alternativas de empleo. Incluso la creación de fuentes de trabajo mejor pagadas, que los convierte en “carne de cañón” por estar ligadas a la estrategia de la guerra, como en la de convertirse en policía municipal, ministerial y federal, para quienes cuentan con estudios medios y profesionales. Así mismo, considero que los medios podrían jugar un rol muy distinto al actual, y dejar a un lado el amarillismo y el morbo; pero los intereses económicos y las afinidades ideológicas con las élites, no parecen avistar panoramas optimistas. Lo que podría incidir en transformar el estado actual cosas, podría ser el fortalecimiento de la sociedad civil que logre presionar y exigir, al menos, mayores criterios de objetividad y profesionalismo en su quehacer periodístico. Respecto a estos dos últimos temas, es importante resaltar que los jóvenes universitarios, se organizaron en los meses de mayo y junio de 2012, para salir a las calles y protestar en la llamada “Primavera mexicana”. Recalamaban ser tomados en cuenta como interlocutores en el debate político nacional, exigiendo ese derecho a la clase política, así como a algunas instituciones estatales como la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (que se supone autónomo y ciudadano). Así mismo, ponen en el centro de sus reclamos, la democratización de los medios masivos de comunicación y la eliminación del sesgo informativo acorde a sus intereses económicos y a sus ligas políticas con las élites del país. Finalmente, los estudiantes que se denominan como el movimiento #Yo soy 132, congruentes con la lectura de los efectos de la violencia en el país, reclaman también juicio político al presidente Felipe Calderón por su responsabilidad en las más de sesenta mil muertes de su sexenio. Aunque el movimiento es muy reciente y es incierto su futuro, aportó un aire de frescura y revitalizó la discusión nacional en el contexto de la contienda electoral federal por la presidencia de México. Tomando en cuenta que este sector

juvenil es el más informado, preparado y crítico, y por lo tanto, consciente de la actual circunstancia de emergencia nacional.

Por otra parte, el quinto y último capítulo analiza algunas de las consecuencias de esta guerra fallida. Primeramente, se remarcó el contexto del trasfondo internacional que subyace a la problemática nacional, guiada por las políticas de securitización, y militarización, encaminadas a consolidar un Estado policial, siguiendo las coordenadas geopolíticas del gobierno estadounidense que diseña un plan hemisférico general para todo el continente. En este rubro se asienta la política prohibicionista asentada en un enorme aparato burocrático, que mueve a un ejército de miles de personas en diversas instituciones policíacas, administrativas, aduaneras, etcétera. A su vez, esto representa presupuestos millonarios para distintos países, que significan un gran negocio en sí mismo. Dentro de este negocio, Felipe Calderón se convirtió en un cliente distinguido, ampliando cada vez más el presupuesto gubernamental incrementando los recursos para la adquisición de los suministros norteamericanos para llevar a cabo su estrategia guerrera. “Beneficiándose” a su vez, de la inversión económica externa, como la de la Iniciativa Mérida. Se revisó críticamente la estrategia de Calderón, desde la mirada de analistas, académicos diversos, especialistas en seguridad, intelectuales y activistas sociales. Resaltando en la mayoría de las opiniones sobre las acciones de gobierno: la improvisación; falta de planeación y estrategia; manejo mediático; falta de acciones para sanear las instituciones policíacas de la corrupción endémica; el combate al crimen de cuello blanco y la corrupción; así como la creciente impunidad, sobre todo, de los funcionarios, políticos y empresarios involucrados. Finalmente, en este último capítulo se revisaron las similitudes y diferencias de la situación actual de México y Ciudad Juárez con Colombia y algunas ciudades de ese país sudamericano. Se remarcaron las diferencias estructurales y geopolíticas entre ambos países, destacando la histórica autonomía relativa de los grupos de traficantes en el país sudamericano y la vinculación con el poder político, así como la relativamente reciente pérdida del control estatal por parte del gobierno mexicano y la consiguiente disputa y emancipación de estos grupos delincuenciales. También, se compararon las formas en que la ciudadanía de ambos países se posiciona y percibe las violencias urbanas. Destacando la sorpresa y el desconcierto, así como la sensación de orfandad respecto al papel del Estado en el caso mexicano, mientras que su contraparte colombiana, al menos en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá se muestran más participativas con

las iniciativas de los gobiernos locales que buscan recuperar el espacio público. Esto al margen de la condicionante estructural como país productor y exportador de drogas, así como de la guerra civil en la que están insertos, y por la vía de los gobiernos locales, disminuir los índices de violencia, con la formulación de políticas de inclusión ciudadana, reestructuración urbana, y diversos programas culturales, artísticos y recreativos.

Recapitulando algunas cuestiones abordadas en este trabajo, tenemos que, si al término del primer año de comenzar esta guerra en Ciudad Juárez, el treinta por ciento de los muertos pertenecían a esta urbe, en la actualidad cuando la contabilidad periodística suma más de sesenta mil, poco más de nueve mil muertes tuvieron a esta ciudad como escenario. Esto indica que los efectos de la guerra se han expandido a otras zonas del territorio mexicano. Además, estas cifras no incluyen a los desaparecidos ni a los heridos. También varias de las grandes ciudades del país (Ciudad Juárez, Torreón, Chihuahua, Tijuana, Monterrey, Tampico, Morelia, Culiacán, Mazatlán) se encuentran viviendo bajo el miedo y en virtual estado de sitio. Hay además, múltiples regiones rurales y zonas urbanas abandonadas por sus habitantes. Las carreteras federales se han vuelto riesgosas o intransitables algunas de ellas. Así mismo, se han interpuesto más de un millar de quejas ante la Comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violaciones, secuestros, tortura, “levantones”, chantajes, cateos ilegales, robos y todo tipo de abusos producidos por las fuerzas policiacas Federal, estatal y municipal, por el Ejército y en menor medida por la Marina. El gobierno federal optó por librar una guerra, que por principio, debería de llevarse a cabo en el país que enarbola la política prohibicionista y que es el más importante consumidor de drogas, además de ser el principal exportador de armas de forma legal e ilegal a este país. Si los costos de la política de confrontación se presentaran en territorio estadounidense, como ocurrió en los años treinta cuando, ante la violencia incontrolable de una mafia que había crecido al amparo de la prohibición del alcohol, dicho gobierno podría virar hacia la legalización de la producción y distribución de drogas, como lo hizo con el consumo de bebidas alcohólicas (Chabat, 2010). Pero como esto es poco probable que ocurra en el corto plazo, la alternativa sería diseñar una política nacional más inteligente y menos sumisa. La actual política estatal, careció y sigue careciendo de una estrategia de inteligencia diseñada previamente, prevaleciendo la improvisación y las visiones sesgadas. En ese sentido, no hay una estrategia que siga las rutas del lavado del

dinero, lo que implicaría ubicar los cruces entre negocios lícitos e ilícitos, o destrabar, los nexos del capitalismo criminal y mafioso. Finalmente, el ataque frontal a la corrupción, la impunidad, así como el fortalecimiento de la cultura de la legalidad deberían estar en el centro de una estrategia, que busque revertir la presencia y crecimiento del crimen transnacional en México, de los traficantes y de la emergencia de otros actores armados que retan al Estado y ponen seriamente en riesgo la gobernabilidad y la fortaleza institucional del país, sobre todo y de manera más extrema, en lugares como Ciudad Juárez.